

SESIONES ORDINARIAS

2026

Supl. (2) al Orden del Día N° 7

SUMARIO: **Observaciones** formuladas al dictamen de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, contenido en el Orden del Día N° 7. **Del Plá y Pitrola.** (2-D.O.-2026.)

Buenos Aires, 8 de abril de 2026.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Martín Menem.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, conforme lo establece el artículo 113 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de formular observaciones al Orden del Día N° 7 (expediente 2-D.O.-2026), dictamen emitido por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, por el cual se modifica la ley 26.639, de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

En los términos del artículo 113 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presentamos observaciones al Orden del Día N° 7/2026 publicado el 7 de abril del corriente, relativo al dictamen de comisión del proyecto de ley 72-S.-2025 de modificación de la ley 26.639, por tratarse de una iniciativa que no plantea un “aprovechamiento racional de los recursos naturales” (una abstracción ya invocada en el llamado Pacto de Mayo) o un “ordenamiento” de la ley, como sostiene el gobierno de Milei en su Nota N° 36/2025 que acompaña el proyecto, sino que la vacía de contenido en función de los intereses del capital minero y financiero, avanzando sobre límites que fueron conquistados mediante la movilización popular en defensa del agua y los territorios.

La Ley de Glaciares no fue una concesión de los gobiernos ni una política ambiental progresiva surgida desde el Estado. Fue el resultado de grandes movilizaciones en todo el país contra la megaminería. Expresó la irrupción de pueblos enteros que enfrentaron proyectos extractivos y lograron imponer un límite a su avance en zonas glaciares y periglaciares, en defensa de reservas estratégicas de agua. Ese límite, con todas

sus contradicciones y alcances parciales, es lo que hoy se intenta remover.

El proyecto del Poder Ejecutivo invierte completamente el sentido de ese límite. Donde hoy existe una protección general, pretende introducir un criterio selectivo que habilite excluir glaciares según su “relevancia” económica. Donde hoy hay prohibiciones, propone reemplazarlas por evaluaciones administrativas que funcionen como mecanismo de habilitación. Donde hoy existe un piso nacional, pretende avanzar hacia una fragmentación que deje en manos de gobiernos provinciales alineados con el lobby minero la decisión sobre qué se protege y qué se entrega.

Este proyecto debe ser comprendido también como una profundización de la orientación inaugurada con la reforma constitucional de 1994, que consagró el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales y bienes comunes y abrió la puerta a la fragmentación de la política ambiental en función de los intereses de las burguesías provinciales asociadas a los capitales extractivos transnacionales. Lejos de ser un “federalismo en acción”, como lo presentó el secretario de Minería, Luis Lucero, en la reunión conjunta de comisiones de ayer, se trata de un mecanismo para transferir poder de decisión a gobiernos que actúan como intermediarios del capital minero, debilitando los presupuestos mínimos nacionales que fueron conquistados como límite frente a ese mismo entramado. Es un proyecto absolutamente unitario, al servicio de un puñado de proyectos mineros. El verdadero federalismo es el de los pueblos que se movilizaron para echar a las mineras, como ocurrió en las puebladas de Chubut, en Mendoza y en Jujuy.

En términos comparativos, el contraste es claro: la ley 26.639 establece una protección amplia de glaciares y ambiente periglacial, con un Inventario Nacional que funciona como referencia objetiva y con prohibiciones a la actividad minera en esas zonas. El proyecto del Ejecutivo no elimina formalmente ese esquema, pero lo desactiva en la práctica: introduce el criterio de “impacto significativo”, habilita interpretaciones provinciales discrecionales, vuelve no vinculante el Inventario y transforma prohibiciones en autorizacio-

nes administrativas mediante estudios hechos a medida. Se pasa así de un límite general a un régimen de excepción. Lo que era una restricción se convierte en una variable negociable.

No se trata de un problema técnico ni de “seguridad jurídica”. El propio Poder Ejecutivo reconoce que la iniciativa responde al reclamo de las provincias mineras agrupadas en la Mesa del Litio y del Cobre (San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy). Es decir, a la presión directa de gobernadores que operan como garantes políticos de las corporaciones y buscan despejar el camino para la expansión extractiva.

Los intereses en juego son concretos. La reforma abre la puerta a proyectos que ya están en fase de exploración y prospección, como Vicuña, de Lundin Mining y BHP, para extraer cobre, oro y plata en San Juan; El Pachón, de Glencore, con cobre, molibdeno y plata en plena cordillera; MARA en Andalgalá, emplazado en zona glacial y periglacial; Filo Colorado, con uranio y tierras raras; Los Azules, con participación de Río Tinto; y el proyecto Rincón de litio en Salta. Son emprendimientos ligados a minerales estratégicos para las cadenas globales, presentados como parte de la “transición energética”, pero que en los hechos refuerzan una inserción dependiente basada en la exportación de materias primas.

Detrás de estas empresas intervienen grandes fondos de inversión y bancos internacionales como JP Morgan o BlackRock, con creciente participación en el sector. El capital financiero y el capital extractivo actúan de manera combinada, impulsando el avance sobre territorios donde existen límites conquistados por la lucha. Según el Banco Mundial, la demanda de minerales como litio, cobre y oro podría crecer hasta un 500 % hacia 2050. Esa presión es la que está detrás de esta ofensiva.

Pero el discurso del “desarrollo minero” contrasta con la realidad. San Juan, tras dos décadas de minería, tiene un 34 % de pobreza, 6 % por encima del promedio nacional. En Catamarca, luego de 25 años de gran minería, el 67 % de la población económicamente activa debió recurrir al IFE durante la pandemia; en San Juan, el 50 %. La minería metalífera representa menos del 1 % del empleo total del país. No resuelve el problema laboral estructural ni en Argentina ni en las provincias donde se implanta.

Tampoco existe un beneficio fiscal significativo. Las regalías están topeadas en el 3 % del valor en boca de mina y sujetas a deducciones. El grueso de la renta queda en manos de las empresas, reforzado por regímenes como el RIGI, que amplían beneficios y garantías para el capital. Se trata de un esquema de apropiación privada de recursos estratégicos con baja participación estatal.

Este avance tiene su contracara en la criminalización de quienes lo enfrentan. Actualmente, 52 luchadores y luchadoras enfrentan causas penales por defender el ambiente. En Mendoza, la imposición del

proyecto San Jorge avanzó con represión e imputaciones; en Chubut, las condenas por el Chubutazo buscan disciplinar a un pueblo que derrotó la zonificación minera; en Jujuy y Salta, la expansión del litio genera conflictos por el agua sin consulta a comunidades; en Catamarca, se persigue a asambleístas de Andalgalá; en Córdoba, vecinos son judicializados por resistir obras ligadas al extractivismo.

La reforma no puede separarse de este cuadro. Allí donde existen límites, el capital intenta removerlos. Allí donde hay resistencia, aparece la represión más directa.

Las audiencias públicas convocadas han sido denunciadas por su carácter fraudulento, incluso militarizado y represivo, evidenciando que no se trata de un proceso de deliberación real, sino de un trámite orientado a legitimar decisiones previamente acordadas entre el Ejecutivo, los gobernadores y las corporaciones.

Por otra parte, corresponde señalar la responsabilidad política no solo de los gobernadores aliados del gobierno, no solo de los diputados del PRO o radicales aliados de la política reaccionaria en curso, no solo del bloque devaluacionista de Provincias Unidas que pueda aportar votos, sino también del peronismo y su oportunismo, pues lejos de constituir una oposición a la ofensiva extractivista, sus gobernadores de las provincias mineras han sido actores centrales del lobby megaminero y han aportado votos decisivos para el andamiaje legal del saqueo, desde la aprobación de la Ley Bases hasta el RIGI. Senadores como Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza acompañaron estas iniciativas, mientras el peronismo también avaló la zonificación minera en Chubut bajo el gobierno de Mariano Arcioni, la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge en Mendoza y la reforma constitucional de Gerardo Morales en Jujuy. Incluso sus sectores llamados “progresistas” sostienen una delimitación funcional que habilita la megaminería fuera de zonas glaciares, alineándose en los hechos con el planteo de las corporaciones. No es una contradicción coyuntural sino una orientación histórica: desde el veto a la propia Ley de Glaciares que llevó adelante Cristina Kirchner, hasta la promoción abierta de la megaminería de la mano de la Barrick Gold, el peronismo ha sido un pilar de este modelo extractivo.

Desde el punto de vista de los derechos conquistados, el proyecto implica un retroceso sobre principios incorporados a partir de la lucha: el principio precautorio, que impide avanzar ante riesgos ambientales graves; el principio de no regresión, que impide retroceder en niveles de protección; y el carácter de presupuesto mínimo nacional, que establece un piso frente a la presión de los intereses privados. No son formulaciones abstractas, sino límites impuestos al avance del capital.

Por todo lo expuesto, esta observación rechaza el dictamen en tratamiento por implicar un retroceso en los límites conquistados frente al avance megaminero, por responder a los intereses del capital minero y financiero y por comprometer un bien común elemental como el agua.

Se deja constancia de la voluntad de ampliar la presente observación en el recinto, convocando a reforzar la movilización popular en todo el país para impedir este nuevo avance sobre los bienes comunes y las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Romina Del Plá. – Nestor Pitrola.